

LUZ MARÍA GARCÍA, DE LA ASOCIACIÓN CHILENA DE EMPRESAS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN



ACTI

Luz María García, gerenta general de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información (ACTI), afirma que, desde la perspectiva del gremio, existen seis acciones prioritarias para los próximos cuatro años.

La primera es definir una Estrategia Nacional de Economía Digital "con liderazgo político al más alto nivel". A ello, se agrega la necesidad de "impulsar un marco regulatorio que habilite la innovación, porque hoy tenemos regulaciones dispersas que generan incertidumbre".

El tercer punto es lanzar un gran plan nacional de talento digital, pues "Chile enfrenta un déficit de al menos 6.000

profesionales TI al año".

A lo anterior, se suma "apurar la digitalización de la economía real y de las mipymes, pues el 70% de ellas tiene baja digitalización".

La quinta propuesta es "acelerar la implementación de la Ley de Transformación Digital, avanzar en interoperabilidad real, identidad digital y servicios públicos simples y completamente digitales para ciudadanos y empresas". Por último, piden "fortalecer la ciberseguridad como política de Estado. Chile debe avanzar hacia una política integral de ciberseguridad y ciberdefensa".

ACTI cuenta con 121 empresas asociadas.

MARCO ANTONIO ÁLVAREZ, DE LA ALIANZA CHILENA DE CIBERSEGURIDAD



ACD

Consolidar una verdadera coordinación público-privada en materia de seguridad digital es el desafío que más destaca Marco Antonio Álvarez, presidente de la Alianza Chilena de Ciberseguridad (ACC), de cara al siguiente gobierno.

"Uno de los puntos clave será acompañar adecuadamente la implementación de la Ley Marco de Ciberseguridad y la puesta en marcha de la nueva institucionalidad, particularmente de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, asegurando una coordinación efectiva con el sector privado y

estándares claros para las organizaciones", explica.

Otro eje fundamental es apoyar a las pequeñas y medianas empresas en la adopción de estándares mínimos de protección digital, ya que suelen estar más vulnerables frente a los ciberataques.

La Alianza Chilena de Ciberseguridad fue creada en 2018 por instituciones como ACTI, AmCham, la Cámara de Comercio de Santiago, la Cámara Nacional de Comercio, Fundación País Digital, el Colegio de Ingenieros, la U. de Chile e Inacap, entre otras.

JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ, DE LA ASOCIACIÓN DE LEGALTECH DE CHILE

"Una de las prioridades para el próximo gobierno debe ser avanzar decididamente en la interoperabilidad del Estado, mediante la disponibilidad de datos públicos a través de API seguras y estandarizadas", afirma José Manuel Jiménez, presidente de Asociación de Legaltech de Chile (Altech), asociación que cuenta con 18 socios y partners.



ALTECH

Además, en la asociación creen que es fundamental avanzar hacia un modelo de "Open justice", un símil de la idea de las finanzas abiertas que busca promover mayor apertura, transparencia y reutilización de la información del sistema judicial.

"Finalmente, proponemos impulsar una agenda clara para el uso de inteligencia artificial en el sistema de justicia, basada en principios de responsabilidad, transparencia y supervisión humana", concluye Jiménez.

LA VISIÓN DE SUS REPRESENTANTES:

Diez gremios "tech" trazan sus prioridades de cara al nuevo gobierno

Impulsar o mejorar la legislación que impulsa la economía basada en conocimiento, incrementar la coordinación público-privada, acelerar la digitalización, diseñar una institucionalidad más ágil y facilitar el acceso a financiamiento son parte del "petitorio" que formulan a la administración que asumió ayer. FABIOLA ROMO PINO

CONSTANZA LEVICÁN, DE CLIMATECH



CLIMATECH

"Tenemos recomendaciones para que el Estado pueda hacer pilotos y contratar innovación mediante compras públicas", sostiene Constanza Levicán, fundadora de Suncast y presidenta de Climatech, quien alerta también sobre la necesidad de que las startups de tecnologías limpias puedan levantar deuda mediante bancos de desarrollo económico, donde el Estado puede ser valioso.

Chile, para el gremio, es un laboratorio vivo de tecnologías climáticas. "Nosotros ya somos proveedores de industrias críticas como las energías renovables, agricultura, tratamiento de aguas, monitoreo ambiental y reciclaje. Al ya tener grandes clientes, podemos convertirnos en proveedores globales de esas mismas empresas", afirma Levicán, quien lidera un gremio que agrupa a 45 empresas de base científico-tecnológica con validación técnica-comercial avanzada.

JOSEFINA MOVILLO, DE FINTECHILE



FINTECHILE

"El primer gran desafío es generar certezas regulatorias. Hoy existen superposiciones y duplicidades regulatorias que elevan costos y reducen competitividad. El rol articulador del Ministerio de Hacienda será clave para alinear criterios entre la CMF, el Banco Central y otros organismos, reduciendo fricciones y mejorando la calidad regulatoria", afirma Josefina Movillo, directora ejecutiva de

FinteChile, agrupación que cuenta con 200 empresas del sector de tecnologías aplicadas a las finanzas.

También es importante continuar fortaleciendo la colaboración público-privada e impulsar el mercado de capitales como motor de crecimiento. "El sistema financiero debe facilitar inversión, financiamiento a pymes e innovación. Profundizar el mercado es una condición necesaria para retomar una senda sostenible de crecimiento económico", añade Movillo, quien espera que el nuevo gobierno lidere la implementación del Sistema de Finanzas Abiertas con urgencia.

ANTONIO CANALE-MAYET, DE LA ASOCIACIÓN CHILENA DE PLATAFORMAS DE MOVILIDAD



ACHIPLAM

Fundada en 2021, la Asociación Chilena de Plataformas de Movilidad (Achiplam) congrega a 16 empresas que abarcan rubros como movilidad compartida, micromovilidad, servicios de última milla, intermediación, logística, desarrollo de software y otros servicios de base tecnológica para la industria de la movilidad.

"Coincidimos con el nuevo gobierno en la imperiosa necesidad de reformar la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte y su reglamento. Tal como se encuentra

formulada, la normativa no se ajusta a la realidad de la movilidad compartida, imponiendo requisitos técnicos de vehículos y licencia que no redundan en una mejora del servicio. Por el contrario, conlleva la restricción del acceso de las personas a la economía digital y a la generación de ingresos formales, además de privar a millones de usuarios del acceso a un transporte seguro, cómodo y accesible que estas aplicaciones proporcionan", afirma Antonio Canale-Mayet, presidente de Achiplam.

FRANCISCO GUZMÁN, DE LA ASOCIACIÓN CHILENA DE VENTURE CAPITAL



ACVC

La Asociación Chilena de Venture Capital (ACVC), que representa a 68 entidades que financian empresas de base científico-tecnológica, espera que el capital de riesgo sea reconocido como una industria y que las políticas públicas se diseñen a partir de ello.

"Desde ahí se pueden abordar desafíos concretos que hoy frenan el desarrollo del ecosistema: avanzar en normativa pendiente que permita atraer nuevas fuentes de capital, como la creación de un fondo de fondos y permitir que las AFP inviertan en esta industria; modernizar el rol de Corfo, para que vuelva a ser un motor del desarrollo del venture capital, como lo fue en etapas anteriores, y adoptar medidas que hagan más atractiva la inversión extranjera, posicionando a Chile como un hub regional de venture capital", dice Francisco Guzmán, presidente de la ACVC.

CLAUDIA BARRIGA, DE AGROTECH CHILE

"Entendemos que los desafíos actuales en organismos críticos como el SAG representan una oportunidad para diseñar una institucionalidad más ágil, capaz de sintonizar los tiempos de la gestión pública con el ritmo acelerado de la evolución tecnológica", comenta Claudia Barriga, presidenta de AgroTech Chile.



AGROTECH

En el gremio —que se formó en 2023 y representa a unas 65 empresas de tecnología aplicada al agro— proponen actualizar la normativa de plaguicidas para incorporar dosificaciones específicas para drones, una mejora que validará prácticas que ya son una realidad y que optimizan de manera directa la eficiencia hídrica y química.

"Asimismo, nos gustaría codiseñar incentivos tributarios simplificados y mecanismos financieros que reconozcan las particularidades de las startups agtech, facilitando un flujo de capital dinámico que impulse su escalamiento", señala la dirigente.

JANET TORRES, DE LA ASOCIACIÓN DE EMPRESAS BIOTECNOLÓGICAS

"En primer lugar, es clave generar condiciones para atraer inversión privada y capital de riesgo especializado en biotecnología, incluyendo incentivos tributarios para I+D y mecanismos que faciliten el financiamiento de empresas deep tech, cuyo desarrollo es intensivo en capital y de largo plazo", sostiene Janet Torres, directora ejecutiva de la Asociación de Empresas Biotecnológicas (Embío).

En segundo lugar, el gremio, que agrupa a 39 empresas, pide avanzar hacia un marco regulatorio más ágil, moderno y predecible, que facilite la experimentación, el pilotaje y el escalamiento de tecnologías biológicas en sectores como salud, agricultura, minería, alimentos y acuicultura.

"También es fundamental impulsar infraestructura tecnológica habilitante, como plantas piloto y centros de escalamiento, que permitan que las innovaciones desarrolladas en Chile puedan transformarse en productos y servicios competitivos a nivel global. Finalmente, creemos que el país debe apostar por una estrategia agresiva de internacionalización de la biotecnología chilena, conectando a nuestras empresas con mercados globales y capital internacional", añade Torres.



EMBIO

FELIPE MANCINI, DE CHILETEC



CHILETEC

Para Chiletec, que agrupa a empresas desarrolladoras de software, tres acciones son urgentes para la agenda del nuevo gobierno. "Primero, fortalecer la institucionalidad de Gobierno Digital. La transformación digital del Estado no puede depender de esfuerzos aislados ni de liderazgos temporales", explica Felipe Mancini, presidente de la organización.

En segundo lugar, el gremio propone impulsar una Ley de Economía Digital, que reconozca al software, los servicios tecnológicos, la inteligencia artificial y los

datos como "sectores estratégicos para el desarrollo del país. Chile tiene talento y empresas capaces de competir globalmente, pero seguimos operando con marcos regulatorios pensados para la economía del siglo pasado".

El tercero es "modernizar la compra pública tecnológica. El Estado debe dejar de comprar tecnología solo al menor precio y comenzar a contratar soluciones que generen valor público, innovación y mejores servicios para la ciudadanía", añade el presidente de la asociación que reúne a más de un centenar de compañías.